



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.**

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado:	LUIS WILSON BÁEZ SALCEDO
Radicado:	110012502000202201359 00
Asunto:	Desestima
Origen:	MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO – DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Disciplinable:	DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA

I. ASUNTO POR TRATAR

Procede el suscrito Magistrado a proferir la decisión que en derecho corresponda en virtud del informe presentado por la doctora MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en su calidad de Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, contra la profesional del derecho DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA.

II. ANTECEDENTES

1º. Se origina el presente asunto disciplinario en el informe elaborado por doctora MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en su calidad de Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, remitido vía correo electrónico de siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022), manifestando la presunta falta disciplinaria cometida por la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, al proferir supuestamente imputaciones injuriosas y afirmaciones temerarias que esgrimió en su contra, con fundamento en los siguientes hechos:

“(…) 1. El instituto de Desarrollo Urbano con destino a la obra: AV TINTAL (AK 89) DESDE LA AV VILLAVICENCIO HASTA LA AV MAUEL CEPEDA VARGAS, formuló oferta de compra por una zona de terreno de 3.330.81 M2 que hace parte del predio ubicado en la KR 89C 34 20 SUR de Bogotá, identificado con el folio de Matricula inmobiliaria: 50S-40279765 M.E. y el Chip: AAA0139KWEF M.E., mediante resolución No. 4505 del 26/09/2018, notificada por aviso el día 7/11/2018 dirigida a los propietarios del predio SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

2. Mediante resolución No. 1246 del 27/03/2019, se ordenó la expropiación administrativa, la cual notificada por aviso a través de la publicación en la página Web y en un lugar público del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, el 5 de junio del 2019, quedando ejecutoriada el día 20 de junio del 2019.

3. Mediante orden de pago No. 2439 del 1/08/2019, por l suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, dinero que tal y como lo ordena la ley fue puesto a disposición del JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ de conformidad con el Código General del Proceso artículo 399 expropiación - numeral 12, toda vez que reposa un proceso ordinario que se encuentra debidamente registrado en la anotación No. 9 del folio de matrícula Inmobiliaria 50S-40279765, instaurada por VIVIENDA SOCIAL COLOMBIANA LTDA, contra la constructora y promotora BCP LTDA (en liquidación) antes LEOPOLDO Y ANIBAL BONNET Y ASOCIADOS LTDA, radicada mediante oficio No. 661 del 15 de marzo del 2002, emitido por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá.

4. Mediante Acta de entrega No. 3475 del 1/02/2019, se realizó la entrega de la zona de terreno y el día 18 de 10/10/2020 se realizó la solicitud de mutación de la zona de terreno.

5. Mediante radicado IDU No. 20215260129932 de fecha 27/01/2021, la doctora DORYS EUGENIA ALVAREZ GARZÓN en calidad de apoderada del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, realizo la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO esta solicitud la realiza aportando los siguientes documentos:

— Acta de conciliación que se llevó a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral el día 27 de octubre del 2020, “Fundación de Derecho y Equidad” autorizada mediante Resolución 0167 del 15 de febrero del 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con el código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588, en donde llegaron a un acuerdo conciliatorio entre las partes convocante el señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO y la parte convocada la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN sobre el valor total de la indemnización con ocasión a la expropiación administrativa del predio identificado con el RT 46881 A.

6. De conformidad a la solicitud realizada por la doctora DORYS EUGENIA ALVAREZ GARZÓN y a los documentos aportados, la Dirección Técnica de Predios del IDU, solicitó a la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo mediante memorando No. No. 202132500350033 del 18/02/2021, la conversión y entrega del Depósito Judicial No. 400100007338617, a nombre del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO.

7. La Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo realizó la solicitud a la Dirección Técnica de Predios del IDU, de adjuntar otros documentos para poder realizar la conversión del título, documentos que fueron solicitados a la apoderada la Dra. Dorys, los cuales fueron enviados por parte de la apoderada, y subsanados por parte de la DTDI del IDU, finalmente el día 27 de mayo del 2021, el funcionario Héctor Urbano nos informa que ya podían reclamar el Depósito Judicial.

8. Posteriormente, mediante radicados IDU Nos. 20215261687312 del 13/10/2021 y 20215261582152 del 24/09/21, la Dra. DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 280612 expedida por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial en calidad de apoderada de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN realizó la solicitud que se le

cancela el valor ordenado en la Resolución de expropiación y solicita información porque se le pague al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO.

9. Mediante radicado IDU No.20213251632541 del 28/10/2021 se le dio respuesta a los derechos de petición, donde se le informa a la peticionaria que la Dirección Técnica de Predios del IDU, ya había realizado el pago al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, conforme a la solicitud elevada el día 27 de enero del 2021, donde se le adjuntan acta de conciliación y otros documentos.

10. La Dra. DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 280612 expedida por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, radica otro derecho de petición mediante radicado IDU No. 20215261884922 de fecha 17/11/2021, donde continúa solicitando el pago y no conforme con la respuesta que se le brindo, la peticionaria insinuando en reiteradas oportunidades de forma temeraria que por parte de la Suscrita Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la abogada gestora Marcela Zuluaga Franco, se “falsificaron o adulteraron los documentos para poder cobrar el valor establecido en la Resolución de expropiación, tal y como se evidencia en los siguientes extractos:

“Una supuesta “acta de conciliación virtual”, de la cual nunca conoció, ni fue informada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA, EN LIQUIDACIÓN, la directora de Predios IDU, ordenó a un desconocido la entrega de la totalidad del pago de la expropiación.

La directora de predios MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en asocio con la abogada MARCELA ZULUAGA FRANCO, dieron contestación a los dos derechos de petición presentados, justificando unas entuendadas maquinaciones para la entrega de todo el dinero al sujeto VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, aduciendo que él presentó el acta referida ante la entidad y le fue entregado el pago total, de los dineros que le pertenecen a nuestra compañía, subjudice’.

PELIGROSO Y POSIBLE MECANISMO SISTEMÁTICO PARA HURTAR DINEROS ESTATALES HASTA POR BILLONES DE PESOS

El presente caso, podría ser sistemático Las razones características son las que los propietarios de múltiples terrenos en la ciudad de Bogotá desde hace 30 o mas años, tuvieron que ceder al IDU partes de terrenos para poder obtener licencias de construcción, como es nuestro caso, esos terrenos se cedieron con la promesa de que cuando se comenzara a construir, el trazado determinado, se le pagarían las tierras

Como INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A - EN LIQUIDACIÓN, cientos y posible miles de propietarios fueron o serán indebidamente notificados, con las argucias que describimos y posiblemente otras. Nuestra empresa se enteró de la resolución, de manera providencial, por cuanto la suscrita apoderada, se encontraba realizando el estudio de uno de los socios de la empresa, cuando se informó de la resolución descrita

Como es nuestro deber como ciudadanos el informar a las autoridades cuando nos enteremos de posibles delitos, nos hemos permitido dar aviso a las autoridades pertinentes y ante esta misma entidad Esperando se actúe de manera inmediata y se resarza a nuestra empresa

11. A pesar de que se le ha informado en reiteradas oportunidades a la profesional del derecho que el pago se realizó al señor Víctor conforme al Acta de conciliación aportada, Dra. DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 280612 expedida por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, sigue manifestando que la suscrita en asocio con la abogada Marcela Zuluaga falsificaron los documentos.

12. En cuanto al trámite del pago realizado por el Instituto de Desarrollo Urbano, debo manifestar que, por parte de esta Dirección técnica, se envió un correo a la notaría 4ª del Círculo de Bogotá donde fue autenticado el poder por el Representante Legal de Gerona y el Apoderado para confirmar la veracidad del documento
(...)

13. De igual forma, con respecto al acta de conciliación, se procedió a solicitar información al Ministerio de Justicia y del Derecho, quienes también confirmaron la autenticidad del acta presentada.
(...)

14. Como se puede evidenciar, los documentos aportados y que soportan el pago realizado son documentos originales expedidos por las autoridades competentes, por lo que no le asiste razón a los señalamientos hechos por la profesional del derecho. (...)" (sic a todo lo anteriormente transcrito)

2º. Mediante informe secretarial de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022), ingresaron las presentes diligencias al despacho para avocar el conocimiento de las mismas, acreditándose la calidad de abogada de la disciplinable DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, mediante certificado No. 281095 de veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

III. CONSIDERACIONES

1º. Competencia

Esta Comisión Seccional de Disciplina Judicial tiene la competencia para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia -, en armonía con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 1123 de 2007, así como en el párrafo transitorio del artículo 257 A de la Constitución Política de Colombia.

En el mismo sentido, el suscrito Magistrado tiene la competencia para adoptar la presente decisión, en aplicación de lo estipulado en el artículo 102 de la Ley 1123 de 2007.

2º. Fundamentos

El Estado a través de la acción disciplinaria busca sancionar los actos que atentan contra la moralidad y la recta administración de justicia, así como contra la eficacia y en general el buen servicio público que deben prestar los **abogados**, jueces y fiscales **en ejercicio de sus funciones**, actuaciones que deben estar sometidas en su desarrollo y ejecución a principios Constitucionales y legales que son de obligatorio cumplimiento.

Cabe recordar que el informe proveniente de un servidor público es una de las formas de dar inicio a la acción disciplinaria, dándose traslado a la autoridad competente de las eventuales

irregularidades en que incurren los abogados litigantes, con el fin de que se apliquen los correctivos correspondientes a cada caso.

En ese sentido, tanto la queja presentada por cualquier ciudadano, como la compulsas de copias dispuesta por los servidores públicos, deben estar fundadas en argumentos de hecho objetivos y verificables, que sean disciplinariamente relevantes, con el fin de evitar congestionar la jurisdicción con asuntos que resulten intrascendentes.

Sin embargo, por encontrarse radicada en cabeza del Estado la titularidad de la acción disciplinaria, la formulación de una queja o la compulsas de copias no conlleva el inicio automático de la investigación disciplinaria, por el contrario, la ley otorga a las autoridades competentes para adelantar dicho proceso, la posibilidad de determinar el mérito de la queja, y si es del caso, decidir, si inicia o no las indagaciones e investigaciones que se consideren pertinentes.

Bajo tales prolegómenos, y en punto a los antecedentes antes citados, se examinará si existe motivo para iniciar investigación disciplinaria en contra de la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA.

En ese sentido, recordemos que se cuestiona disciplinariamente el hecho de que la profesional del derecho DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, actuando en calidad de apoderada de la SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GENORA S.A. – EN LIQUIDACIÓN, en el derecho de petición radicado en el Instituto de Desarrollo Urbano el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), mediante radicado IDU No. 20215261884922, realizó expresiones que, en criterio de la doctora MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en su condición de Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, resultan temerarias, pues a su juicio atentan contra su dignidad y la de la abogada MARCELA ZULUAGA FRANCO.

Al respecto, esta Corporación analizó la documental allegada con el informe, especialmente el derecho de petición radicado por la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, actuando en nombre y presentación de la Compañía INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, denominado “*DENUNCIA POR CORRUPCIÓN ANTE EL IDU*” dirigido a la Subdirectora General de Gestión Corporativa, correspondientes a las supuestas manifestaciones hechas por la abogada encartada, los cuales cataloga como injuriosos, resaltando específicamente lo siguiente:

“3 JUSTIFICACIONES ILEGALES PARA SUSTENTAR EL INDEBIDO PAGO AL TERCERO DE MALA FE

El derecho de petición de octubre 28 de 2021, fue respondido con justificaciones cuyos hechos son evidentemente ilegales y posiblemente ilícitos.

INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA, EN LIQUIDACIÓN, en única beneficiaria del pago por expropiación del depósito judicial RT.46881 A. pago que debe ser realizado por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

3.1 Una supuesta “acta de conciliación virtual”, de la cual nunca conoció, ni fue informada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA, EN LIQUIDACIÓN, la directora de Predios IDU, ordenó a un desconocido la entrega de la totalidad del pago de la expropiación

La directora de predios MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en asocio con la abogada MARCELA ZULUAGA FRANCO, dieron contestación a los dos derechos de petición presentados, justificando unas entuertadas maquinaciones para la entrega de todo el dinero al sujeto VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, aduciendo que él presentó el acta referida ante la entidad y le fue entregado el pago total, de los dineros que le pertenecen a nuestra compañía, subjudice.

3.2 Orden sospechosa para el pago, enviada a Tesorería, por MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en asocio con la abogada MARCELA ZULUAGA FRANCO Mediante memorial ordenó a DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo con la justificación, absurda de que le entregaran el cheque al sujeto VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, porque una supuesta abogada, DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO, había allegado la solicitud, “(...) la doctora DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO, en calidad de apoderada del señor VICTOR HUGO JIMENEZ CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.318.158 de Manizales, la cual solicitó que el cheque saliera a nombre del señor VICTOR HUGO JIMENEZ CASTRO(...)”

3.3 Por acciones y omisiones de las tres funcionarias del IDU, esta entidad se dejó hurtar el dinero que ahora debe entregar a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA, EN LIQUIDACIÓN

La directora de predios, MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO y la Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo, DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO en asocio con la abogada MARCELA ZULUAGA FRANCO-Dirección Técnica De Predios Indudablemente, hubo omisión de las funcionarias del IDU, el acta carece de total validez, en razón a que la empresa que represento: INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA, EN LIQUIDACIÓN, en manera alguna conoció de tal audiencia, ni fue convocada, ni nombró al señor CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ como apoderado para tal diligencia, ni acepta en manera alguna, una sola letra del supuesto acuerdo contenido en tal documento.

Es de anotar que jamás un acta de conciliación puede ser tomada en cuenta como autorización para la entrega de monto alguno, cuanto mas que las mismas funcionarias que firmaron las órdenes de pago jamás pudieron encontrar a la empresa, a pesar de que la dirección de la empresa en la cámara de comercio era la misma de siempre en el momento de la firma de la resolución.

Nunca conocieron al señor MIGUEL ARANGO DE FEX, representante legal de la empresa, para de manera supuestamente inocente entregar a un aparecido cualquiera la totalidad del dinero sin poder alguno.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Y páginas más adelante se lee:

“4 PRESUNTA ILEGALIDAD E ILICITUD DEL FRAUDULENTO DOCUMENTO UTILIZADO PARA REALIZAR LA TOTALIDAD DEL PAGO

4.1 Sin poder alguno del representante legal adelantaron la audiencia virtual de conciliación

En razón a que en manera alguna, el representante legal de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, el doctor MIGUEL ARANGO DE FEX, otorgó poder a abogado alguno para conciliar deuda alguna a nombre de la empresa.

4.2 El IDU, a través de sus funcionarias, ejerció instrucción ejecutiva de una acta de conciliación, competencia no permitida por la ley El IDU ejerció instrucción, al hacer

efectivo el pago con la mera presentación del “Acta Virtual de Conciliación”, omitió atender la ley que regula los efectos del acuerdo conciliatorio, cuya acta únicamente presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de 1998).

Y bien es sabido que un proceso ejecutivo se adelanta en jurisdicción civil, ante un juez y no es un documento intercambiable ante una pagador.

4.3 La doctora MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, es funcionaria en el IDU desde hace diez años, conoce debidamente el trámite para proteger los dineros públicos y no los atendió

La documental presentada por el IDU para justificar el pago a VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO es una desfachatez, evidencia de una total irresponsabilidad de quienes lo realizaron y de quien lo firma.

Es de anotar que las mismas funcionarias: María Del Pilar Grajales Restrepo Directora Técnica de Predios y Marcela Zuluaga Franco Abogada, fueron quienes elaboraron los dos documentos: la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019 y la contestación a los dos derechos de petición Nos. 20215261582152 y 20215261687312. La primera lo firmó y la segunda participó en la elaboración.

6 PELIGROSO Y POSIBLE MECANISMO SISTEMÁTICO PARA HURTAR DINEROS ESTATALES HASTA POR BILLONES DE PESOS

El presente caso, podría ser sistemático. Las razones características son las que los propietarios de múltiples terrenos en la ciudad de Bogotá desde hace 30 o mas años, tuvieron que ceder al IDU partes de terrenos para poder obtener licencias de construcción, como es nuestro caso, esos terrenos se cedieron con la promesa de que cuando se comenzara a construir, el trazado determinado, se le pagarían las tierras.

Como INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN, cientos y posible miles de propietarios, fueron o serán indebidamente notificados, con las argucias que describimos y posiblemente otras. Nuestra empresa se enteró de la resolución, de manera providencial, por cuanto la suscrita apoderada, se encontraba realizando el estudio de uno de los socios de la empresa, cuando se informó de la resolución descrita.

Como es nuestro deber como ciudadanos el informar a las autoridades cuando nos enteremos de posibles delitos, nos hemos permitido dar aviso a las autoridades pertinentes y ante esta misma entidad. Esperando se actúe de manera inmediata y se resarza a nuestra empresa.” (sic a todo lo anteriormente transcrito)

Al respecto, al analizar si esas presuntas manifestaciones ostentan la suficiente carga fáctica que derive en la posible comisión de una falta disciplinaria que conlleve a abrir una investigación en contra de la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, se concluye que de las mismas no es posible adecuar típicamente el comportamiento reprochado a la falta contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

En ese sentido, no puede perderse de vista el contexto en que fueron proferidas las manifestaciones que hoy son objeto de censura, pues véase que se dieron al interior de la reclamación que estaba realizando la compañía INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN, a través de la profesional del derecho encartada, toda vez que, el Instituto de Desarrollo Urbano presuntamente había realizado el pago por el valor de dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (\$2.443.648.757) moneda corriente, al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO quien presuntamente no estaba autorizado para tal fin, como consecuencia de la expropiación ocurrida a un inmueble que era propiedad de la citada compañía, en el que lógicamente se cuestiona la decisión de entregarle el dinero a dicha persona sin

supuestamente verificar la autenticidad del poder y del acta de conciliación, sin que el hecho de que la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo urbano hubiera considerado que contenía expresiones irrespetuosas, se convierta en suficiente para pregonar la existencia de una injuria o de una acusación temeraria.

Aunado a lo anterior, se debe resaltar lo indicado en el derecho de petición por la doctora DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, en el cual enfatiza que *“es nuestro deber como ciudadanos el informar a las autoridades cuando nos enteremos de posibles delitos, nos hemos permitido dar aviso a las autoridades pertinentes y ante esta misma entidad. Esperando se actúe de manera inmediata y se resarza a nuestra empresa (...)”*

En consecuencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, el cual reza: *“ARTÍCULO 67. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.”*, razón por la cual, la disciplinable consideró pertinente poner en conocimiento de las autoridades correspondientes, las presuntas irregularidades que a su juicio pueden llegar a configurar conductas punibles, con el fin de que se adelantaran las investigaciones necesarias.

Adicional a lo anteriormente descrito, debe indicarse que no son pocas las oportunidades en las cuales se ha pronunciado la jurisprudencia disciplinaria, frente a la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, la cual reza: *“Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.”*

Ciertamente, la jurisprudencia disciplinaria judicial ha definido los elementos constitutivos del animus injuriandi, siguiendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señalando al respecto que para la configuración del *“ánimus injuriandi, es decir, la conciencia del carácter injurioso de la acción, deben concurrir: (i) la imputación de un hecho deshonroso de una persona a otra, conocida o determinable; (ii) el conocimiento del carácter deshonroso del hecho imputado por quien hace la acusación; (iii) el daño o menoscabo de la honra de la persona como consecuencia del carácter deshonroso del hecho imputado; y (iv) la conciencia de quien hace la imputación, de que el hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra”*.

Así entonces, puede colegirse que para estructurar la comisión del tipo disciplinario previsto en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, es necesario que las afirmaciones desplegadas por la profesional del derecho, tengan la virtualidad de lesionar o poner en peligro los derechos a la honra, a la reputación y al buen nombre del servidor público, colega o persona a la que se dirijan esas imputaciones deshonorosas, de lo contrario estaremos navegando en el terreno de la atipicidad objetiva.

En ese sentido, resulta provechoso resaltar lo dicho por nuestro Órgano de Cierre, en decisión de dos (2) de noviembre de dos mil veintidós (2022), Magistrado Ponente: doctor MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO, al interior del proceso disciplinario radicado con el número 11001110200020180088601, destacándose lo siguiente:

“(…) la falta contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 se soporta en un desvalor de conducta de considerable intensidad, pues no cualquier expresión podría considerarse como injuriosa o como una acusación que carezca de una razón cuando menos plausible. En todo caso, la corporación advierte que en muchas ocasiones los abogados suelen emplear un lenguaje franco y directo de aquello que consideran es contrario a derecho. Este tipo de planteamientos, por supuesto, no deben considerarse en principio como constitutivos de una expresión injuriosa o de una acusación temeraria, pues será necesario analizar el contexto de la situación y de verificar con estricto rigor cuál fue la finalidad que se perseguía en cada caso.

Como un aspecto más puntual, también puede ocurrir que cuando el profesional del derecho decide cuestionar una decisión a través de los recursos otorgados por el ordenamiento jurídico le es permitido efectuar valoraciones y conclusiones que suponen una posición jurídica diferente a la expuesta en la decisión recurrida. En esos casos, si el abogado decide afirmar que una determinada decisión es abiertamente ilegal, contraria a derecho o incluso constitutiva de prevaricato, no por ello se está ante la actualización de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. Sobre el tema en comento, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

[...] la Comisión no comparte los argumentos tenidos en cuenta por la primera instancia para predicar un actuar constitutivo de falta disciplinaria por parte de la investigada al usar la expresión “de mala fe” dentro de una acción de tutela haciendo alusión al comportamiento del quejoso. Esto por cuanto a juicio de esta Colegiatura dicha expresión no tiene la entidad suficiente para afectar la reputación del señor (...) en la sociedad, ni mucho menos lleva intrínseca una minusvalía de su dignidad humana. No se debe perder de vista que la expresión fue utilizada dentro de un proceso judicial con el ánimo de demostrar un punto de su argumentación, en ejercicio de su libertad de expresión, y no se desprende de este el conocimiento y la voluntad de generar un daño o menoscabo en la dignidad del quejoso [Negrillas fuera de texto].

Posteriormente, la Comisión también reiteró que no toda expresión tiene la entidad suficiente de afectar la reputación de un sujeto, y agregó que el abogado en ejercicio de sus deberes profesionales, a través del ius postulandi, por lo general cuestiona una decisión desde la técnica jurídica con expresiones quizás subidas de tono, pero aquella situación no constituye per se una afectación a la integridad del destinatario de un (i) recurso, (ii) alegación, (iii) petición, e (iv) incidente. En ese sentido, la Corporación refirió que, por ejemplo, el vocablo prevaricato, en la mayoría de los casos no afecta la integridad de una autoridad, en razón a que, por el contexto, se está ante el cuestionamiento de una decisión o consideración, y no ante una afirmación vaga o infundada de que alguien realizó un conducta típica, antijurídica y culpable. Sobre este particular, en su momento se preceptuó lo siguiente:

[P]ueden ser tolerables el uso de otras expresiones similares, como, por ejemplo, decir que algo es abiertamente contrario a derecho, que determinada decisión es manifiestamente ilegal o que determinado acto o conducta puede ser constitutiva de prevaricato. De este modo, el uso de términos o conceptos que hacen parte de la técnica jurídica por sí solos no pueden ser necesariamente indicativos de la existencia de una conducta injuriosa.

Así, en circunstancias como estas, lo que debe verificar la autoridad disciplinaria es si existe, por un lado, el aludido animus injuriandi, o, por el otro, si las expresiones empleadas carecen por completo de fundamento que lleve a la conclusión de que el profesional del derecho efectuó una acusación sin tener una mínima base jurídica, fáctica o probatoria.

De hecho, para la Comisión es importante aclarar que el vocablo prevaricato debe ser entendido en mayoría de casos como sinónimo de la realización de un tipo objetivo, más no que alguien haya realizado una conducta típica, antijurídica y culpable, pues esto último supone la demostración de elementos mucho más exigentes para hacer una aseveración de dicha naturaleza.

Por la misma razón, mucho menos puede ser procedente equiparar la realización de un tipo objetivo, cualquiera que este sea, con la sindicación de que alguien es delincuente. Esta última expresión, que ni siquiera está contenida en el Código Penal colombiano actualmente vigente, sí podría llegar a tener una carga considerablemente peyorativa, porque hace referencia a una persona que comete delitos de forma habitual, aspecto que implicaría señalar que determinado sujeto de forma frecuente ha cometido conductas punibles y que en esa lógica ha sido declarado responsable penalmente

Por tanto, se indica que dependerá del contexto y de la finalidad de la expresión para saber si el profesional del derecho pudo haber incurrido o no en la falta disciplinaria descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. Igualmente, el operador disciplinario tendrá que corroborar si la expresión censurada fue adecuada típicamente a partir de los ingredientes de «injuriar» o «acusar temerariamente» porque, ante sus diferencias estructurales, en ciertos casos, por una indebida imputación jurídica la conducta podrá resultar atípica. (...)”

En este orden de ideas, teniendo como punto de partida los lineamientos antes resaltados, considera este despacho que la conducta censurada a la abogada **DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA**, desplegada a través de los hechos narrados en el informe génesis de la presente actuación, si bien pudo resultar censurable en criterio de la informante, un examen imparcial de lo sucedido arroja como conclusión que en el caso bajo examen no se materializó una injuria o una acusación temeraria, requisito esencial para la tipificación de la falta en comento.

Efectivamente, analizados en su contexto los señalamientos antes transcritos, realmente no pueden ser catalogados en estricto rigor como injuria o acusación temeraria, sino que se trata de planteamientos sobre una decisión tomada por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano que, aunque pueden resultar reprochables y no compartibles, no tienen la entidad suficiente para que se adecúen a la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Debe tenerse en cuenta que todos los abogados tienen el deber de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, propendiendo por su cabal cumplimiento. Sin embargo, para el caso que nos ocupa el suscrito Magistrado no avizora que lo manifestado por la profesional del derecho DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, tenga la suficiente trascendencia disciplinaria que habilite a esta Jurisdicción para iniciar una investigación en su contra, pues, no se evidencia el *animus injuriandi* que, como se advirtió, se convierte en requisito *sine qua non* para la incursión en la falta en cita.

Consecuentemente, la Comisión habrá de darle aplicación al artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, Código de Ética de la Abogacía, que en su tenor literal enseña lo siguiente:

*“Artículo 68. La Sala de conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y **podrá desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad**”.*

De manera tal que se desestimará el informe allegado por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, absteniéndose de abrir proceso disciplinario contra la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, ya que los hechos denunciados no comportan la entidad necesaria para que el Estado ejerza la acción disciplinaria en contra de la referida togada.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la **COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.**

R E S U E L V E

PRIMERO: DESESTIMAR DE PLANO la actuación radicada con el número **110012502000202201359 00**, presentada en contra de la abogada **DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, con sujeción a la competencia asignada en el artículo 102 de la misma codificación, y con sustento en los fundamentos plasmados en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

TERCERO: En firme, **ARCHÍVENSE** las presentes diligencias, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS WILSON BÁEZ SALCEDO
Magistrado